

Coyhaique, cuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

Que, ante la sala única del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, se desarrolló audiencia de juicio oral seguida contra **CARLOS EUSEBIO MANSILLA TORO**, chileno, RUN no. 19.936.216-K, natural de Comodoro Rivadavia, Argentina, nacido el 10 de febrero de 1994, de 29 años, talabartero, domiciliado en la Población Clotario Blest, calle Valle Cerro Nevado No. 3071, comuna de Coyhaique, asistido por el abogado Defensor Penal Público Ricardo Flores Tapia.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el fiscal Álex Oliveros Núñez. Todos los letrados con domicilio y forma de notificación establecidos en forma previa en el Tribunal.

OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acusación.- Que los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación, son aquellos contenidos en el auto de apertura de fecha de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Garantía de Coyhaique, del siguiente tenor:

El día 9 de noviembre del 2019 alrededor de las 01:30 horas de la madrugada el imputado condujo en estado de ebriedad con 2,09 gramos por mil de alcohol en la sangre de acuerdo al alcotest el vehículo Fiat modelo Fiorino placa patente HH-5006 por calle Juan Vadell en la Población Clotario Blest Coyhaique chocando un vehículo que se encontraba estacionado un Dahiatsu Charade de propiedad de la víctima Francisco Iván Cárcamo Mansilla en calle Juan Vadell frente al número 3098 resultando con daños foco delantero costado derecho quebrado avaluado en la suma de \$ 30.000,00.- (Treinta mil pesos),



huyendo del lugar luego de amenazar en forma seria y verosímil a la familia de la víctima Cárcamo Mansilla con que les pegaría un tiro y les iba a dar un machetazo.

Carabineros logra interceptarlo con posterioridad a una segunda concurrencia cuando conducía en estado de ebriedad en calle Tucapel Jiménez, percatándose del estado alcohólico del imputado aplicando el alcotest el que arrojó el rango ya señalado procediendo a su detención. Posteriormente se realizó el examen de alcoholemia que arrojó 2,20 gramos por mil de alcohol en la sangre según informe N° 986-19 de fecha 3 de diciembre de 2019.

El imputado no portaba su licencia de conducir ya que se encuentra suspendida por condena en causa RIT 1968-2018 de fecha 20 de marzo de 2019 por el plazo de 2 años

Que, para el acusador, los referidos hechos configuran el delito consumado de Conducción en estado de ebriedad calificado previsto y sancionado en el art. 196 en relación a 110 y 209 de la Ley de tránsito, y no dar cuenta de accidente de tránsito previsto y sancionado en art. 195 en relación a 168 de la ley 18290 de Tránsito, y amenazas simples previsto y sancionado art. 296 N° 3 del Código Penal, cometidos en grado de consumado, estimando que el acusado tiene la calidad de autor del artículo 15 Numeral 1 del Código Penal.

El Ministerio Público refirió que concurría la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 12 Numeral 16 del Código Penal, esto es, ser reincidente en delito de la misma especie respecto de la conducción en estado de ebriedad, y la agravante del artículo 12 N° 15 respecto de delito no dar cuenta accidente de tránsito y de amenazas simples.



Por lo que solicitó que se sancionara al acusado Mansilla Toro por el delito de conducción en estado de ebriedad calificado la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio, multa de diez (10) Unidades Tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por cinco (5) años, más accesorias legales y costas de la causa. Por el delito de no dar cuenta de accidente de tránsito, la pena de multa de siete (7) Unidades Tributarias mensuales y suspensión de licencia por un (1) mes. Por el delito de amenazas simples, quinientos cuarenta (540) días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias generales y con expresa condenación en costas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: Alegaciones de Cargo.- Que, en la apertura del juicio el fiscal nos hace presente los hechos de la acusación que configuran los ilícitos descritos como también la participación del acusado precisando los medios de prueba que se valdrá para acreditar el núcleo factico y la dinámica del mismo, en razón de ello solicita una decisión de condena.

En su discurso de cierre, argumentó que respecto del delito de amenaza se requiere la declaración del ofendido para establecer la seriedad y verosimilitud del contenido de los dichos del acusado, pero que a pesar que la unidad de atención de Víctimas de la fiscalía ubicó al ofendido, solicitándole la concurrencia a estrados éste le afirmó que no tenía interés en ello, no pudiendo contar con su testimonio, lo mismo ocurrió con la demás prueba testimonial, vinculada a este testimonio, no contando con otros antecedentes para ubicarlos, por lo que no existe la prueba para arribar a una decisión de condena, ni menos para los daños que se invocan.



En lo que respecta al delito de manejo en estado de ebriedad estima que se encuentra acreditado el ilícito, basado en la declaración del propio acusado quien reconoce los hechos, corroborado por los funcionarios policiales, además de la prueba documental y pericial que se rindió. De tal manera que estima acreditado el hecho y la participación del acusado, como la minorante del artículo 11 N° 9 esto la colaboración sustancial al esclarecimiento del hecho por las actividades desarrolladas por Mansilla Toro en la etapa investigativa y judicial.

TERCERO: Argumentación de defensa.- Que la defensa letrada, argumenta que respecto del delito de conducción en estado de ebriedad la defensa solo solicitará la aplicación de minorante de responsabilidad penal en la audiencia respectiva. En lo que respecta a los otros dos ilícitos, solicita la absolución de su representado, en razón que no se encuentran los presupuestos legales y la prueba de cargo será insuficiente para ello.

En sus alegaciones finales comparte las alegaciones del Ministerio Público en cuanto no se acreditó el delito de amenazas y los daños provocados por la conducción de tal manera que no habiéndose acreditado ello, desaparece el delito de no dar cuenta de accidente de tránsito. Reconoce solo el delito de conducción en estado de ebriedad en carácter simple, concurriendo la minorante del artículo 11N°9 del Código Penal, en calidad de calificada, solicitando una pena de 300 días.

CUARTO: Convenciones probatorias.- Que los intervinientes según consta en el auto de apertura no acordaron convenciones probatorias.



QUINTO: Autodefensa del acusado. Que, en presencia de su defensor, el acusado fue debido y legalmente informado por la Jueza Presidente, acerca del contenido de la acusación y, en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, renunció a guardar silencio informando de su versión de los hechos.

En la oportunidad prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, otorgada la palabra al acusado, guardó silencio.

SEXTO: La prueba de cargo. Que, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de la acusación y la participación del acusado en los mismos, el Ministerio Público incorporó legalmente al juicio las siguientes probanzas:

A. **TESTIFICAL:** Debidamente individualizados y juramentados prestaron declaración: Pablo Serrano Fernández y Ximena Silva Albarrán.

B.- **DOCUMENTAL.**-El Ministerio Público incorporó los siguientes documentos mediante lectura: 1. Hoja dato de atención de urgencia N° 20067178UU016 del imputado. 2. Extracto de filiación y antecedentes de imputado Carlos Eusebio Mansilla Toro. 3. Hoja de vida de conductor imputado. 4.- Copia simple de sentencia dictada en causa Ruc 1800748902-8 RIT 1968-2018 con certificación de ejecutoria. 5.-Copia inscripción de vehículo patente HH-5003.

C.- **PERICIAL.** Consistente en el Informe de alcoholemia, suscrito por Maria Velásquez Olivares química del Servicio Médico Legal incorporación conforme al art. 315 del Código Procesal Penal.

D.- **OTROS MEDIOS DE PRUEBA:** consistente en: 1.Dos fotos de vehículo y daños. 2. Documento prueba de alcotest número 6810.



SÉPTIMO: Prueba de la Defensa: Que la Defensa del acusado hizo suya la prueba testimonial del Ministerio Público presentando solo la documental consistente en la carta poder de venta de vehículo.

OCTAVO: Hechos acreditados: Que estos sentenciadores, luego del debate de rigor, según lo prescrito en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal y de ponderar la prueba producida en juicio conforme lo dispone el artículo 297 del código referido, lograron adquirir, por unanimidad y más allá de toda duda razonable, la siguiente convicción:

El día 9 de noviembre del 2019, alrededor de las 01:30 horas, Francisco Cárcamo Mansilla denunció que Carlos Eusebio Mansilla Toro condujo el vehículo Fiat modelo Fiorino placa patente HH-5006 por calle Juan Vadell cuando frente al número 3098 en la Población Clotario Blest, comuna de Coyhaique, éste chocó el vehículo estacionado marca Dahiatsu modelo Charade de su propiedad resultando éste móvil con daños y además había efectuado amenazas al padre de éste y una menor de edad con que les pegaría un tiro y les iba a dar un machetazo.

Ese mismo día, cerca de las 03:30 horas, en una segunda concurrencia de Carabineros logra interceptar a Carlos Eusebio Mansilla Toro cuando éste conducía en estado de ebriedad el vehículo antes mencionado por calle Tucapel Jiménez, percatándose del estado alcohólico del conductor.

Conforme a la prueba respiratoria, funcionarios de Carabineros, constataron su ebriedad, aplicándole la prueba de alcotest que arrojó como resultado 2,09 gramos por litro de alcohol en la sangre; siendo trasladado al hospital donde se realizó la alcoholemia de rigor, verificándose que el valor correspondía a 2,20



(dos coma dos) gramos por litro de alcohol en la sangre conforme informe pericial N° 986-19 de fecha 3 de diciembre de 2019.

Asimismo Mansilla Toro realizaba la conducción del vehículo motorizado con su licencia de conducir suspendida por condena en causa RIT 1968-2018 de fecha 20 de marzo de 2019 por el plazo de 2 años.

NOVENO: Valoración de la Prueba. Que, para dar por establecidos los presupuestos de hecho consignados en el motivo anterior, el tribunal analizó la prueba vertida durante la audiencia con libertad y sin más limitación que la de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, conforme a la regla contenida en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Como punto de partida, diremos en el análisis de la declaración del acusado como método de defensa, reconoce como hecho cierto que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad, el automóvil Fiat Fiorino, de color blanco, pero que niega las amenazas y haber colisionado el vehículo estacionado. En este mismo orden de ideas, el acusado admite que condujo hasta calle Juan Vadell, conversó con una persona afuera de su casa, ya que éste le debía dinero y la devolución de sus herramientas, (hachas, cuñas), a consecuencia de ello, se armó una discusión y la hija de uno de ellos tomó un hacha y un cuchillo, quien lo amenaza para luego él hacer abandono del lugar. Precisa que fue sorprendido por funcionarios policiales conduciendo su vehículo en la misma calle y que ese día bebió mucha cerveza; para finalmente ser trasladado hasta el hospital donde le tomaron la muestra sanguínea para la respectiva alcoholemia.



De esta manera podemos determinar que el acusado accedió voluntariamente a las diligencias policiales para determinar el grado de alcohol en la sangre, aunque no se recuerda de la realización de la prueba respiratoria. También en este punto, no contamos con el testimonio del principal testigo de cargo para establecer las amenazas simples y los daños ocasionados al automóvil, para establecer si ellos fueron consecuencia directa de la conducción, punto sobre el cual adelantamos la decisión absolutoria, y de la cual el Ministerio Público señala en su alegación final que no cuenta con prueba suficiente para ello.

Por otra parte, la información referida por el acusado en cuanto que el día de los hechos a la hora mencionada manejó un automóvil, bajo los efectos del alcohol se encuentra corroborada por la declaración de **Ximena Estefany Silva Albarrán**, funcionaria de Carabineros quien nos relata que el día 9 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 01:39 horas, se encontraba acompañada del funcionario Pablo Serrano cuando reciben un llamado de la central CENCO, a fin que concurren a Juan Vadell N° 3078, por daños en choque, entrevistándose en el lugar con Francisco Cárcamo quien le menciona que un sujeto conocido le había provocado daños en el vehículo y además de amenazar a su papá y hermana indicándoles que les daría un tiro y machetazos.

Ante la información la declarante señala que se realiza el encargo del vehículo, posteriormente cerca de las 03:45 horas deben concurrir nuevamente a calle Juan Vadell, y al transitar por el sector encontraron un móvil que reunía las característica similares, el cual se dirigía en contra del sentido del tránsito, razón por la cual fiscalizan el móvil, percatándose que el conductor mantenía hálito alcohólico, su incoherencia al hablar y que éste no contaba con la licencia de conducir. Menciona que el imputado accedió a realizarse las pruebas respiratoria y de sangre de forma



voluntaria, ni se dio a la fuga. Recuerda que el funcionario Pablo Serrano, le toma declaración al denunciante.

En este mismo orden de ideas, podemos establecer que lo expresado en los párrafos anteriores por Silva Albarrán, es armónico en cuanto al contenido y elementos esenciales con el relato de **Pablo Alejandro Serrano Fernández**, quien en lo esencial ratificó cómo se gestó el procedimiento en cuanto al día, hora y lugar que ocurren los hechos, por una denuncia de daños en choque, donde se entrevista con la víctima, quien le señala que momentos antes de su llegada, una persona que conducía un Fiat Fiorino, color blanca, la cual había cortado con una galletera, en estado de ebriedad quien colisiona su automóvil, además de realizar amenazas a su padre de muerte y su hermana menor de edad, a quien le dispararía y la niña le inferiría una herida con un arma blanca, acogiendo la denuncia por el delito de daños y amenazas. Puntualiza que el denunciante se llama Francisco Iván Cárcamo Mansilla y el denunciado Carlos Mansilla, con la finalidad de dar con persona denunciada realizan algunas rondas preventivas pero no logran dar resultado positivo.

Recuerda que cerca de las 03:00 horas reciben un nuevo llamado para concurrir a la calle Juan Vadell N°3098, donde había regresado el acusado, pero esta persona no estaba en la casa, conversando en ese momento con el denunciante quien les dice que el denunciado momentos antes había regresado y que profirió amenazas en el mismo domicilio.

Posteriormente sostiene el declarante que ellos, salen por calle Juan Vadell, y llegar a calle Tucapel Jiménez divisan una camioneta con las mismas características, dan la vuelta y entran por calle Juan Vadell luego por calle William Sanders, quedando el móvil referido frente al carro policial por calle Juan Vadell, siendo fiscalizado el conductor solicitándole



la licencia de conducir y su cédula de identidad donde se pudo comprobar que no portaba ningún de los documentos solicitados siendo identificado más tarde como Carlos Mansilla Toro. Ante ello, se ordena que descienda del móvil pudiéndose percatarse de su evidente estado de ebriedad, ya que le costaba mantenerse en pie, hablaba incoherencia, con un fuerte hálito alcohólico, en ese momento se procede a la detención por amenazas a la denunciante y luego lo llevan al hospital de Coyhaique para constatar lesiones y realizar la alcoholemia. Indica el declarante que mientras estaba en la espera de la toma de muestra se le realiza la prueba respiratoria la cual arrojó 2,09 gramos de alcohol por litro en la sangre, a consecuencia de ello se le imputa la detención por estado de ebriedad para luego regresar a la Comisaría donde verifican la identidad y la cual corresponde a Carlos Eusebio Mansilla Toro, el cual mantenía prohibición de conducción de vehículos motorizados.

Insiste que el acusado conducía el auto por lo que él observó unas 1 o 2 cuadras, por Tucapel Jiménez y ellos salían por Juan Vadell, y la placa patente del móvil es HH5006, este último dato corroborado por el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V. M del Registro Civil que corresponde a un furgón marca BEDFORD año 1963 de color blanco a nombre de Florencio Tadeo Molina Valdés.

Que ante la exhibición al declarante de la boleta de comprobante de prueba respiratoria para detectar el alcohol en la sangre afirma que el documento corresponde al realizado ese día, por la firma que se consigna; añadiendo que todas estas diligencias se realizan de manera voluntaria por el acusado.

Respecto del set de 2 imágenes exhibidas sostiene que las fotografías corresponden a los daños que observó en el automóvil del denunciante un



automóvil Dahiatsu Charade, de propiedad del denunciante. En cuanto a la imagen 2, corresponde al lugar de los daños, y es un abollón. Aclara que ellos llegan al lugar cuando estaban los daños.

Afirma que no recuerda que la víctima haya señalado que estaba dormido, pero que éste les menciona el nombre y apellido del detenido. Aclara que el vehículo dañado no sabe a qué nombre estaba, como tampoco si el acusado se dedicaba a la labor de la leña, pero el denunciante les dijo que el vehículo estaba cortado con una galletera, lo cual fue corroborado por él.

Señala que la víctima indicó que le choca el auto, no recuerda con qué parte, solo que Mansilla lo impacta con su auto. El foco del auto del ofendido no se observa que este quebrado en la imagen, no sabe si estaba trizado, ni menos que el parachoques se encuentre hundido, no se aprecia; es una especie de abolladura o raspón en la parte trasera del foco que se aprecia en la imagen. Que frente al control policial del acusado señala que esta persona se detiene de manera inmediata, no se da a la fuga, accede a realizarse el alcotest y alcoholemia.

Ante este testimonio tal vacilante sobre los daños, la mala calidad de imagen de las fotografías exhibidas, la ausencia del testimonio del propietario del vehículo o en su caso el denunciante de los hechos Francisco Cárcamo Mansilla, nos encontramos impedidos de establecer algún tipo de daño en el vehículo y que éste haya sido consecuencia directa de la conducción del acusado.

Que para acreditar la graduación alcohólica de la sangre, confirmó y dio mayor rigor científico a los indicios de ebriedad del acusado que hacen presente los funcionarios policiales, el resultado derivado del **informe de alcoholemia N° 986-19**, el cual certifica que la muestra de sangre, como



perteneciente a Carlos Eusebio Mansilla Toro, RUT N° 19.936.216-K, tomada para examen de alcoholemia el día 09-11-2019, en el Centro Asistencial Hospital Regional Coyhaique a la 04:51 hrs, obteniendo un resultado de 2.20 g/L. (DOS/COMA VEINTE gramos por litro en la sangre. Lo cual concuerda con el **dato de atención de urgencia** N° 20067178UU016, de fecha 09 de noviembre de 2019, del mencionado recinto hospitalario que en lo relevante el profesional que atendió al acusado registra “**conductor en estado de ebriedad, evidentemente ebrio.**” A ello se suma el documento signado como comprobante de la **prueba respiratoria intoxilaizer**, que arrojó como resultado 2,09 gramos por litro en la sangre, el cual fue reconocido por el testigo Serrano Fernández.

Finalmente respecto que el acusado no poseía licencia de conducir, se encuentran los documentos acompañados por el ente persecutor consistente en la Hoja de Vida del Conductor en el cual se registra que no mantiene licencias registradas y además que mantenía una prohibición de conducir vehículos motorizados por el periodo de dos años, según sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2019 por el Tribunal de Garantía de esta ciudad.

Todo lo anterior, es coincidente y ratificado por los propios dichos del acusado Mansilla Toro en su declaración prestada en juicio.

DECIMO: Calificación jurídica de los hechos. Que los hechos consignados en el considerando octavo de este fallo permite calificarlos como constitutivos del delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin licencia de conducir, previsto y



sancionado en el artículo 196, en relación con los artículos 110, 111 y el artículo 209 todos de la Ley N°18.290,

A nivel legal el artículo 196 de la Ley 18.290 establece que “El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con (...), ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves.

A su vez, el inciso 2° del artículo 110 consigna que “Se prohíbe, asimismo, la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol”

Por su parte el artículo 111 establece que “Para la determinación del estado de ebriedad del imputado, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo, que conste en el informe de alcoholemia o el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros.

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que hay desempeño en estado de ebriedad cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo”.

Concluimos que en la audiencia de juicio, se lograron establecer hechos que corresponden plenamente a la descripción típica que se efectúa en los



artículos citados, toda vez que el acusado Mansilla Toro, condujo un vehículo motorizado en circunstancias que se encontraba en estado de ebriedad, lo que, inicialmente los funcionarios de carabineros observaron cuando encontraron al acusado en la vía pública y que en su apreciación pudieron atender que de acuerdo al estado de los sentidos (esto es, hálito alcohólico, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar) lo que fue confirmado con el examen de alcoholemia que se le aplicó al conductor y que dio un resultado de 2,2 gramos por mil de alcohol en la sangre, es decir, superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre, lo que conforme al inciso 2° del artículo 111 antes transcrito corresponde a desempeño o conducción en estado de ebriedad.

Desde ya diremos que la circunstancia de la conducción del acusado sin la licencia de conducir, fue acreditada la hoja de vida del conductor y la sentencia de fecha 19 de marzo de 2019 en donde se imponía la prohibición de conducir este tipo de vehículos, como da cuenta el material probatorio razonado, para estar en presencia del artículo 209 de la Ley de Tránsito.

DÉCIMO PRIMERO: Sobre la participación: Que, respecto de la autoría del acusado en el ilícito analizado, ha quedado acreditado primeramente, con lo declarado por los funcionarios de carabineros que sitúan al acusado en el lugar de los hechos y toman detenido señalando que no contaba con dicha autorización, lo cual concuerda con la prueba documental aportada por el Ministerio Público.

Además, el propio acusado al declarar en la audiencia reconoció haber conducido, el vehículo en circunstancias que se encontraba ebrio y que no contaba con el documento respectivo.



Conforme a lo precedente y hechos establecidos en el motivo octavo de esta sentencia el Tribunal concluye más allá de toda duda razonable, que la participación del acusado se encuadra en lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber participado en la ejecución del hecho, de manera inmediata y directa.

DÉCIMO SEGUNDO: Absolución: Que, como consecuencia de las reflexiones expuestas en el motivo noveno, se debe concluir, forzosamente, que la prueba aportada en la audiencia de juicio oral por el ente persecutor no cumplió con el estándar mínimo para dar por acreditado los delitos de Amenazas simples ya que no se contó con prueba para acreditar la seriedad y verosimilitud de ello. En cuanto al delito de no dar cuenta de accidente de tránsito, debemos señalar desde ya que la prueba de cargo fue insuficiente para acreditar un daño en el vehículo Dahiatsu, modelo Charade, ya que las imágenes eran de mala calidad y no se contó con ningún otro antecedente que el testimonio de oídas del ofendido traído a juicio por los funcionarios policiales que participan en el procedimiento, careciendo de un valor epistemológico de tal magnitud que permita derribar la presunción de inocencia que beneficia al acusado. De manera que no habiéndose logrado convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia del hecho materia de la acusación, éste tribunal, tal como lo señaló en el veredicto, debe absolver al acusado Mansilla Toro de los cargos fiscales que lo suponía autor de los delitos mencionados.

DECIMO TERCERO: Debate sobre circunstancias y factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena. Que el representante del Ministerio Público, en la respectiva audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, incorporó el extracto de filiación del acusado, el cual registra anotaciones y la sentencia de fecha 20 de marzo de 2019, RUC 1800748902-8 del Tribunal de Garantía de Coyhaique



por el delito de conducción de vehículo motorizado sin contar con la debida licencia de conducir.

El Fiscal señaló que concurre una circunstancia atenuante como es la establecida en el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal y la agravante de ser reincidente en delitos de la misma especie consagrada en el artículo 12 N° 16 del citado cuerpo legal, por lo que procede a la compensación y se aplique la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio la pena de multa de 2 UTM y la suspensión de licencia de conducir por 5 años, es condigna con la causa, no oponiéndose a la concesión de pena sustitutiva.

Que la Defensa del acusado atendido que tiene solo una anotación con una pena privativa de libertad condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, y las demás corresponde a Multa procede es una condena que no sume 3 años, por lo que solicita reclusión domiciliaria nocturna acompañando el peritaje social para tal efecto a una pena de 541 días atendida las circunstancias del caso.

DECIMO TERCERO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: Que, en cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial del imputado al esclarecimiento de los hechos, solicitada por la defensa del acusado, y a la cual el Ministerio Público no se opuso, este Tribunal ha resuelto acogerla por estimar que la conducta asumida por el acusado, con posterioridad a los hechos, ha evidenciado una colaboración valiosa al reconocer, abiertamente, su participación culpable en los hechos que se le imputaron.

Conforme a lo declarado por los funcionarios de carabineros que intervinieron en el procedimiento, el acusado Mansilla Toro reconoce ser el conductor del móvil, sin que nadie le atribuyera dicha responsabilidad,



permitió que se le efectuara la prueba respiratoria de alcohotest, no se opuso a la toma de muestra de sangre de su cuerpo para los efectos de realizar la respectiva alcoholemia que estableció, sin lugar a dudas, el estado de ebriedad por el que se le condenó. Además, dimitió a su derecho a guardar silencio y prestó declaración reconociendo los hechos imputados por el persecutor, en aquello que incluso resultó probado.

Todo ello, en opinión de este Tribunal, evidencia en el encartado una disposición de colaboración que ha sido sustancial para el esclarecimiento de los hechos lo que permite al tribunal concluir que le beneficia la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, pero no procede su calificación ya que no existe ningún elemento que pueda apreciarse como superlativa.

En lo que respecta a la agravante del artículo 12 numerales 15 y 16 del Código Penal, esto es la reincidencia específica y genérica, acompaña la sentencia de fecha 19 de marzo de 2019, causa Ruc 11800748902-8 RIT 1968-2018, del Tribunal de Garantía de Coyhaique, condenó a Carlos Eusebio Mansilla Toro a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, multa de dos unidades tributarias mensuales y suspensión de su licencia para conducir por dos años, como autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad y sin licencia para conducir, perpetrado en Coyhaique, el 3 de agosto de 2018. Se acompañó además la certificación de fecha 28 de marzo de 2019, de la Ministro de Fe del Tribunal, que da cuenta que la sentencia anterior se encuentra ejecutoriada.

Sin perjuicio de tratarse del mismo delito y de no haber transcurrido más de cinco años desde la fecha en que tuvo lugar el hecho anterior, este Tribunal rechazará la agravante invocada, pues se sustenta en la dictación



de una sentencia que también fue utilizada para fundamentar la agravante del artículo 209 inciso segundo de la Ley N°18.216, que calificó el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad por el cual se condenó al ACUSADO, de manera tal que, considerar nuevamente dicha condena, vulneraría gravemente el principio de non bis in ídem, que en este caso se encuentra expresamente regulado en el artículo 63 inciso segundo del Código Penal, que establece que “Tampoco lo producen (el efecto de aumentar la pena) aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin ellas no puede cometerse”, y en este caso, la pena solicitada por el Ministerio Público se sustenta precisamente en la calificación del delito de manejo en estado de ebriedad, por el delito de manejo en estado de ebriedad sin contar con su licencia por estar suspendida.

DECIMO CUARTO: Determinación de pena: Que, la pena corporal asignada al delito de conducción en estado de ebriedad, según dispone el artículo 196 de la Ley N°18.290, es la de presidio menor en su grado mínimo. Acto seguido y de conformidad a lo que prescribe el artículo 209 del mismo cuerpo normativo, dicha pena debe aumentarse en un grado cuando el autor tuviere suspendida su licencia de conducir o no la hubiere obtenido, cuyo es el caso de marras.

Que para establecer el marco penal en el cual se debe fijar, estima el Tribunal que la aplicación de la regla del artículo 209 de la Ley del Tránsito, constituye una regla de determinación de pena impuesta al sentenciador y, que además, conforma una regla especial y preferente.

Sobre el particular, cabe tener presente que las modificaciones introducidas por el legislador a la Ley de Tránsito, en lo que se refiere al delito de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol,



y su penalidad, han tenido evidentemente por objeto establecer un sistema o régimen más riguroso en la conducción de vehículos motorizados, mediante - precisamente - el aumento de las penas que éstos ilícitos llevan consigo. Tal ha sido el derrotero marcado, a modo de ejemplo, por las Leyes N° 20.068 de 2005, N° 20.580 de 2012 y N° 20.770 de 2014, que modificaron entre otros, el artículo 196 de la Ley N° 18.290, relativo al delito de manejo en estado de ebriedad.

Pues bien, fue precisamente la Ley N° 20.580, del año 2012, la que estableció el actual artículo 209 de la Ley de Tránsito, incorporando un inciso 2°, que señala a la letra: “si los delitos a que se refieren los artículos 193 y 196 de la presente ley, fueron cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que teniéndola hubiese sido cancelada o suspendida, el tribunal deberá aumentar la pena en un grado”, lo que permite concluir que la pena debe ser exasperada en razón de esta ausencia de autorización o hacerlo en contra de una resolución judicial, como es la sentencia que prohíbe la acción de conducir.

Una vez realizado el aumento de pena, procede tener presente la circunstancia atenuante quedando radicado en la pena de presidio menor en su grado medio, atendido el artículo 69 del Código Penal, ello se apreciara en el quantum que se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

En cuanto a la pena pecuniaria, no se vislumbran razones para exacerbarla, por lo que se impondrá en el mínimo y se concederán parcialidades, tomando en cuenta que el encartado es padre de 3 hijos de 10, 6 y 2 años y se desempeña en labores informales como obrero y talabartero, lo que hace estimar que sus facultades económicas son exiguas, no existiendo probanzas en un sentido distinto.



En cuanto a la suspensión de la licencia de conducir, atendido que esta es la segunda vez que incurre en este tipo de ilícitos se aplicará en el quantum que se expresará en la parte resolutive de la sentencia.

DÉCIMO QUINTO: Pena sustitutiva: Que se cumple en la especie los presupuestos exigidos en el artículo 8 de la ley 18.216 para la concesión de la pena sustitutiva solicitada por la defensa, de reclusión parcial, pues la pena a imponer en su conjunto, no excederá de tres años de privación de libertad; si bien ha sido condenado anteriormente por un simple delito, como consta en su extracto de filiación y antecedentes en causa RIT 1968-2019 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, con fecha 20 de marzo de 2019 como autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 2 UTM, reclusión parcial y dos años de suspensión de licencia de conducir, que no supera los dos años de privación de libertad; por último de los documentos aportados por la defensa consistentes en el informe social el cual mantiene un grupo familiar compuesto por su madre y él, en tanto sus hijos de 10, 6 y 2 años viven con su madre aportando ingresos para su manutención que provienen de los ingresos que sus labores como obrero y talabartero. Que de acuerdo a los antecedentes presentados en el informe social, el acusado se encuentra dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica manteniendo arraigo social y familiar informe que no fue objetado por el persecutor, y resultan concordantes con la actividad que dice realizar el sentenciado, lo que da cuenta de su arraigo familiar, lo que permite al tribunal presumir que la pena sustitutiva la inhibirá de cometer nuevo delito, por lo que se concederá la pena sustitutiva solicitada.

Atendido lo dispuesto en el artículo 7 inciso penúltimo de la ley 18.216, el control se hará por carabineros, pues no se presentó informe de



factibilidad técnica para el monitoreo telemático, debiendo preferirse tal caso el control por carabineros en tanto no se establezca la factibilidad del monitoreo telemático en el domicilio del sentenciado.

DÉCIMO SEXTO: Costas. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal, 600 del Código Orgánico de Tribunales, habiendo sido defendido por la Defensoría Penal Pública y atendido a que sus condiciones económicas, conforme a los antecedentes acompañados, resultan exiguas para satisfacerlas se le eximirá del pago de las costas de la causa.

DÉCIMO SEPTIMO: De los abonos. Que según el auto de apertura en el considerando décimo tercero a Mansilla Toro, fue detenido, 6 de marzo de 2023, y no se encuentra afecto a cautelares en esta causa, por lo que se debe abonar 1 día.

DECIMO OCTAVO: Registro. Para los efectos procesales correspondientes, dejaremos constancia que todas las declaraciones dadas por quienes revisten la calidad procesal de “intervinientes” como la de los “testigos” y “peritos” como la lectura que se practicó de aquellos documentos incorporados quedaron consignadas íntegramente en el registro de audio. Se desestima el documento carta poder venta de vehículo de fecha 7 de agosto de 2019, ya que en nada aporta a lo razonado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 5, 7, 11 N° 9, 15 N°1, 18, 21, 25, 30, 47, 49, 49 bis, 50, 67, 69 y 70 del Código Penal; artículos 110, 111, 196 y 209 del DFL 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290 ; artículos 1, 4, 36, 45, 47, 281 y siguientes, 295, 296, 297, 309, 314, 328,



333, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 del Código Procesal Penal y artículo, 1, 3, 8, de la Ley 18.216, SE DECLARA:

I.- Que, se absuelve al acusado **Carlos Eusebio Mansilla Toro**, ya individualizado, de los cargos que se formularon en su contra por la Fiscalía, como autor directo, por los delitos consumados de no dar cuenta a la autoridad de todo accidente con daños previsto y sancionado en el artículo 195 en relación al artículo 176 de la Ley 18.290 y del ilícito de amenazas no condicionales, del artículo 296 N° 3 del Código Penal, presuntamente ocurrido el día 9 de noviembre de 2019 en la ciudad de Coyhaique.

II.- Que, se condena al acusado, **Carlos Eusebio Mansilla Toro**, ya individualizado, a sufrir la pena de **quinientos cuarenta y un día (541) de PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, MULTA DE DOS UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, A LA SUSPENSIÓN POR CINCO AÑOS DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS**, y a las penas accesorias de suspensión de cargos u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de desempeñarse en la conducción de un vehículo motorizado en estado de ebriedad y sin contar con la licencia de conducir, cometido el día 9 de noviembre de 2019, en la comuna de Coyhaique.

III.- Que reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 8 de la Ley N°18.216, SE SUSTITUYE al sentenciado, el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuestas por la pena de RECLUSIÓN PARCIAL, por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituyen, bajo la modalidad de RECLUSIÓN NOCTURNA, consistente en el encierro en el domicilio del sentenciado, ubicado en Cerro Nevado N° 3071,



Población Clotario Blest Coyhaique, entre las 22 horas de cada día hasta las 06 horas del día siguiente.

Atendida la inexistencia de informe de factibilidad, el control deberá ser efectuado por Carabineros.

El sentenciado, deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de Coyhaique, dentro del plazo de 5 días, contados desde que estuviere firme esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el sentenciado cumplirá íntegra y efectivamente las penas privativas de libertad impuestas o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En todo caso, servirá de abono a la condena 1 día que permaneció el sentenciado detenido.

IV.- Que para el pago de la multa impuesta se le conceden SEIS cuotas mensuales, principiando el mes siguiente a aquel en que quede firme el fallo, en el equivalente que tenga en moneda legal el día del pago efectivo. El no pago de una sola de las cuotas, hará exigible el total de la multa impuesta.

Si el sentenciado, no tuviere bienes para el pago de la multa impuesta, sufrirá por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión a razón de un día por cada tercio de unidad tributaria mensual a que ha sido condenado, lo que en la especie equivale a seis días de reclusión, computándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual adeudada, sin que esta pueda exceder de seis meses, o bien con su acuerdo previo, por la pena de



prestación de servicios en beneficio de la comunidad, computándose ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual adeudada.

V.- Que se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa.

Se previene que el magistrado Patricio Zúñiga Valenzuela, estuvo por efectuar una interpretación distinta al voto de mayoría, respecto del artículo 209 inciso 2°, de la Ley de Tránsito, el cual establece...“Si los delitos a que se refieren los artículo 193 y 196 de la presente Ley, fueren cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que teniéndola, hubiese sido cancelada o suspendida, el tribunal deberá aumentar la pena en un grado”.

Que este aumento de pena en un grado de la citada norma, en los términos en que está redactada, admite dos interpretaciones. Una primera interpretación, es que la pena se radica en el presidio menor en su grado medio, constituyendo un nuevo marco penal en abstracto y una segunda interpretación la cual se amplía el marco penal quedando en una pena que consta de dos grados, esto es, de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio.

Estima este prevencionista, que aumentar la pena ampliando el marco penal, resulta más acorde con el principio pro reo, ya que al adicionar un grado más se convierte en una pena compuesta de dos grados, que cumple con el mandato legal y con la finalidad de la pena en cuanto a la proporcionalidad de la misma, existiendo equivalencia y razonabilidad entre el castigo como respuesta al injusto. (En este mismo sentido la Corte de Apelaciones de Talca, resolvió en el RIT 26-2019, en sede penal).

A su turno, interpretando el artículo 209 del Código Penal, ciñéndose a la teoría objetiva de la interpretación -por las dificultades que suscita la



subjetiva que obliga a reconstruir la voluntad de un legislador compuesto- y a la luz de lo prescrito en el párrafo 4 del Título Preliminar del Código Civil, que es el cuerpo de normas al que debe recurrir el intérprete y respecto de lo cual nuestra doctrina es conteste en cuanto a su aplicación, como lo señalan autores como Politoff, Matus y Ramírez, en su clásica obra Lecciones de Derecho Penal Chileno, parte general, segunda edición de 2003, (p.110-114) o de manera más extendida Enrique Cury Urzúa, en su libro Derecho Pena Parte General, octava edición del año 2005 (p.193-198).

En efecto, recurriendo al elemento gramatical y entendiendo las palabras de la norma en comento en su sentido natural y obvio, se puede concluir que la expresión “aumentar”, según la primera acepción de la RAE, es “dar mayor extensión, número o materia a algo”, lo que se condice con la interpretación que sostiene que “aumentar” empleada en el 209 implica que la pena aumente en su extensión o materia, pasando de una pena de un grado a una pena de dos grados, lo que incluso es más acorde con tenor literal de la norma; si el legislador hubiese pretendido que se decantara la pena en un grado más gravoso hubiese preferido expresiones como “elevar”, lo que no acontece en la especie.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente el razonamiento efectuado por la decisión de mayoritaria del Tribunal, que ha sido aplicar esta “inhabilidad” como si fuera una “inhabilitación”, este voto hace presente en la sentencia que la “suspensión de licencia”, entendida ahora como pena legal, que para una persona que a la fecha de los hechos conducía un vehículo motorizado sin haberla obtenido, tal sanción no puede llevar en sí misma la imposibilidad de obtenerla, ya que la Ley N° 18.290, sólo establece la referida imposibilidad para las hipótesis en que



se aplica la sanción accesoria de “Inhabilitación o cancelación de licencia” que no es el caso.

Regístrese y comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía de competente, para su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación al artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, comuníquese a la Contraloría General de la República. Hecho archívese.

Fallo y prevención redactado por el Juez Patricio Zúñiga Valenzuela

R. I. T. N° 18-2023.

RUC: 1901208512-8.

Pronunciado por los Jueces Titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique integrado por Rosalía Mansilla Quiroz quien presidió la audiencia, Pablo Freire Gavilán y Patricio Zúñiga Valenzuela.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXXZXEMPHVX